



PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

DISCURSO DEL CRO.

CAMILO ESCALONA MEDINA,

PRESIDENTE DEL PARTIDO

SOCIALISTA DE CHILE

EN SU 61° ANIVERSARIO

Estimado Presidente:

Estimados compañeros y compañeras:

Realizamos esta reunión del Consejo General del P.S. al comenzar la semana de celebración de nuestro 61º aniversario, y a poco más de un mes de haberse instalado en La Moneda el segundo gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia que encabeza el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Estamos en una nueva etapa de la vida del país, en la que el P.S. ha asumido mayores responsabilidades y debe, en consecuencia, responder a las mismas con una capacidad política fortalecida y renovada, con el objeto que su mayor gravitación en la sociedad civil y el gobierno de la nación signifiquen un aporte efectivo a la consolidación de la democracia, a la erradicación de la pobreza y a la construcción de una sociedad más justa, libertaria, civilizada y próspera.

Conscientes de este desafío hemos adelantado al país una visión de conjunto de lo que debe ser la agenda gubernamental, como expresión de un compromiso auténtico y a fondo con la nueva administración del Presidente Frei en la que son relevantes destacadas figuras del socialismo chileno.

Hemos afirmado que la lucha contra la pobreza y por las reformas sociales y económicas no sólo no se contraponen, sino que es complementaria con la lucha por las reformas político-institucionales que afiancen el proceso de reconstrucción democrática. Nos resulta absurdo, carente de contenido y de exclusivo afán propagandístico que se nos diga que el país no se debe desgastar con el tratamiento de estas materias y, peor aún, que las reformas político-institucionales no le interesan a la gente, en circunstancias que la realidad del país indica que la transición no ha terminado.

El histórico fallo del ministro Milton Juica que hace justicia en uno de los más aberrantes actos de terrorismo de estado efectuados durante el régimen militar, y la imposibilidad constitucional del Presidente de la República de decidir ante la inédita y gravísima circunstancia del paso a la Justicia Militar del General Stange, han conducido una vez más a que

millones de chilenos reflexionen y concluyan que nada tiene de ajeno a la gente el tema de las reformas constitucionales en aquellos artículos que reducen severamente las facultades del Presidente de la República para remover a los comandantes en jefe, cuando sea necesario al país o a las propias instituciones de la defensa nacional.

Es nuestro deber declarar que el país se satura por la inmoralidad política de quienes, habiendo formado parte decisiva de la dictadura militar en sus inspiraciones y proyecto político y que, manteniéndose en una terca decisión de defender los enclaves autoritarios, intentan trasladar su propia y ominosa responsabilidad a la Concertación, al Presidente Frei y su gabinete político. En efecto, los máximos personeros de la derecha política insinúan mal manejo en la tensión habida con el General Stange en un acto de grave inmoralidad y corrupción política, por cuanto son esos mismos personeros los que se han apresurado a rechazar las reformas constitucionales que realmente le darían al Presidente de la República las facultades de decidir en todos aquellos asuntos que son correspondientes a su condición de Jefe de Estado y evitarían en su origen las tensiones que se vivieron la semana pasada. En conclusión, la gran lección que se desprende de las consecuencias políticas originadas por el fallo del Ministro Milton Juica, es que las reformas institucionales pendientes constituyen el principal tema de Estado planteado para el segundo gobierno de la Concertación.

Reafirmamos que la colusión de los grupos opositores en el Senado, dentro de los cuales la casi totalidad de los llamados senadores designados se mueve automáticamente en resguardo de los padrones básicos del modelo implementado por el régimen militar, significan un severo obstáculo para legislar en la modernización de la vida social del país.

Ocurrió así cuando la mayoría opositora cercenó gravemente las reformas laborales propuestas por el gobierno de Patricio Aylwin y cuando hizo lo mismo con el Estatuto Docente, con las Leyes de Salud, con la Ley de Bases del Medio Ambiente y con materias de profunda significación para la vida de millones de chilenos. Hay quienes han ido perdiendo de vista el enorme daño provocado por esta situación al proceso democrático debido a que la distorsión y desconocimiento de la representación popular impide que el Estado cumpla con el mandato entregado por la sociedad chilena a las fuerzas políticas. En efecto, al bloquearse la acción de gobierno en el Senado se evita que se materialicen

aquellos objetivos e intereses por los cuales la gente votó y se provoca el proceso de deslegitimación y descrédito de la institucionalidad y de la política que existe en la sociedad chilena.

La estrecha alianza del grupo de senadores designados con la oposición más extrema, la usurpación que su presencia significa a la soberanía popular, nos hacen reafirmar que el envío de la reforma constitucional para poner término a tan agravante institución debe constituirse en uno de los ejes del debate político-nacional, a fin que la opinión pública sepa con claridad quienes en la oposición son demócratas y aperturistas a la hora de recolectar votos y quienes lo son en forma permanente y de principios.

La derecha liberal, aquella sinceramente convencida que el régimen democrático es lo mejor para el país, agrupada básicamente en el interior de Renovación Nacional se acerca cada día más al momento de tomar opción ante el dilema inescapable de concordar con la Concertación aquellas reformas esenciales pendientes, o proseguir anclada a la hegemonía de la derecha pinochetista, al integrismo conservador, al que sólo interesan aquellos cambios que le den mayor capacidad de entrar y obstruir la acción del gobierno democrático.

Muchos, en los sectores liberales de la derecha responderán que nuestro ánimo es ponerlos en una situación insostenible. Pero más allá de cual sea nuestro ánimo subjetivo, es evidente que estos sectores no pueden seguir lucrando de un discurso político de tonos liberales y aperturistas en el mismo momento que suman sus votos y su capacidad intelectual a la línea confrontacional que imponen los núcleos más duros y refractarios de la oposición.

En las palabras, el discurso liberal se esfuerza en crecer en las bases sociales y culturales de la Concertación, pero en los hechos prácticos su conducta entorpece el camino hacia la consolidación democrática. Somos de la opinión que el debate nacional sobre las reformas constitucionales debe despejar estas inconsistencias y oportunismos. De por medio hay responsabilidades históricas frente al país y no sólo un problema de eficiencia legislativa. Se trata, ni más ni menos, del carácter que adopte la democracia en reconstrucción y de la veracidad de los compromisos programáticos que hemos contraído con la voluntad popular.

Compañeros y compañeras:

Queremos convocar al conjunto del Partido a dar el ejemplo en la lucha por la dignificación de la política.

Esto significa la aplicación rigurosa del Código de Ética redactado por la Mesa del Partido por decisión del Comité Central, así como caminar decididamente en la búsqueda e implementación de nuevas formas de hacer política, de una estrecha y vital comunicación con las personas y con todo el pueblo. Se trata no sólo de evitar el encapsamiento negativo de la acción partidaria a los confines de sedes y locales, sino que por sobre todo, lograr el contacto diario con la gente, humanizar y redescubrir la esencia del ideal socialista que sitúa a la persona, al individuo, como la verdadera quintaesencia de nuestras motivaciones políticas e ideológicas. Ese individuo al cual el estado dictatorial aplastó, hasta hace pocos años y que ahora no se siente convocado. Ni la macroeconomía ni el mercado le consideran sujeto activo. Nuevas formas de hacer política deben reincorporarlo al esfuerzo democratizador.

El humanismo socialista no se ciñe, ni se rige por modelos preconcebidos o esquemas cerrados. Más aún, repugna todo afán por reducir la vida social a dogmas o integrismos de cualquier especie; por lo mismo, el humanismo socialista debe discurrir potente y sin cortapisas por el cuerpo social, promoviendo aquellos valores que continúen haciendo latir en el hombre y en el alma de la sociedad contemporánea, la libertad, la justicia y la solidaridad y; con más fuerza aún, deberá estimular la participación y protagonismo de los movimientos sociales, de aquellos actores que más sufren la desigualdad, la explotación, los abusos y la discriminación para promover el bienestar social de los trabajadores, la mujer, la juventud, el adulto mayor y los sectores sociales más pobres y desamparados.

Debemos reelaborar en nosotros el modo de percibir y asumir la noción de futuro. Ahora tenemos que evitar esa manera tan enraizada en nosotros de pensar el futuro como utopía inalcanzable y el presente como metódico sacrificio. Debemos construir futuro. Tenemos que hacer ahora más dignidad para nuestro pueblo; tenemos que trabajar ahora porque desaparezca el hambre y la pobreza extrema de las poblaciones; tenemos que descubrir e impulsar ahora nuevos mecanismos redistributivos para ir superando las aberrantes desigualdades que segmentan odiosamente

nuestra sociedad; tenemos que movilizarnos **ahora** por el mejoramiento de la calidad de vida, expresada en salud pública, en educación para la juventud y en seguridad social para la mayoría.

Una visión humanista de la vida económica y social, al contrario de lo que muchos creen, no desprecia los equilibrios macroeconómicos, la importancia del crecimiento y el buen estado general de las finanzas del país. Pero les entiende, en su propia esfera; vale decir, como contribuciones de la ciencia económica, desde la dirección y gestión del proceso productivo, al gran objetivo de generar una sociedad más justa y solidaria.

En consecuencia, nuestra valoración no es tecnocrática, no endiosa ni enajena su visión de la sociedad a instrumentos técnicos, cuya finalidad es servir a las personas.

Por el contrario, tenemos ejemplos recientes de la falta de objetividad del fundamentalismo criollo. Pocos días atrás fue recibida por círculos influyentes, con evidentes muestras de desapego a nuestra dignidad de nación en desarrollo, la ex primer ministro de Gran Bretaña cuyas recetas, junto con las que aplicó Ronald Reagan en Estados Unidos, se repliegan en los principales centros del sistema mundial, precisamente por sus enormes secuelas sociales y el agravamiento de las desigualdades, sin que ese costo redundara, ni mucho menos, en la eliminación de la recesión y los desequilibrios estructurales. Tal realidad ha puesto en crisis el nudo del pensamiento neoliberal de "Estado mínimo" y "mercado máximo".

Se ha hecho evidente que "el mercado es cruel". Es decir, que carece de los atributos que le permitan operar en la dirección de la justicia social, arrojando por su propia dinámica de funcionamiento a extensos sectores a la marginalidad, la ignorancia y el embrutecimiento. Es por eso que recobra actualidad el concepto de un sistema de economía solidaria que reconoce formas mixtas de funcionamiento de la economía, con espacios de operación del mercado, con intervención del Estado y acciones económicas directamente sociales.

De modo que aún cuando las ciencias sociales se encuentran todavía en proceso de formulación de las respuestas más globales y de largo plazo a los apremios, tragedias y desafíos provocados por el neoliberalismo,

reemergen las concepciones humanistas y las propuestas que impulsan y alientan a los Estados y a los países hacia el aprovechamiento social y nacional de las potencialidades técnicas, intelectuales y empresariales, creadas por el avance de la civilización, reabriendo espacios para el desarrollo de las fuerzas progresistas y de izquierda que enfrentan un reto inédito: generar respuestas y alternativas a este proceso contradictorio en una nueva etapa, internacionalizada e interdependiente de la sociedad contemporánea.

Se ha puesto de relieve que el rol de asignación de recursos que cumple el mercado debe ser acompañado, complementado y corregido, por una política de recursos humanos en todas las esferas, desde cada empresa por separado, pasando por las políticas sociales hasta las políticas globales. Cada día más, la dirección económico-social tiene que dar cuenta del dilema de fondo olvidado por muchos en este período: no hay desarrollo sin el hombre. En tal sentido, la capacitación y los derechos laborales de los trabajadores y la participación de las organizaciones sindicales resultan un propósito no sólo cívico y cultural progresista, sino que también un requisito para el aumento de la capacidad competitiva de Chile, en una economía internacionalizada. Estamos convencidos, que se trata de ampliar la presencia del país en el mercado mundial, y también de acentuar la dignidad y la calidad de vida de millones de personas que hacen posible el modelo exportador.

Desde este punto de vista, el Gobierno de la Concertación, que se propone consolidar y extender la política de crecimiento con equidad, situando como objetivo central de la misma la erradicación de la extrema pobreza, cuenta con el apoyo entusiasta y decidido del Partido Socialista, que pone a disposición de este enorme desafío, todo su potencial y experiencia, convencido que es posible abrir nuevas alternativas para el desarrollo nacional que permitan incrementar el proceso productivo, respetar y extender los derechos de los trabajadores, proteger el medio ambiente y la naturaleza, así como ampliar la equidad y la justicia social.

Asimismo, en la dirección de un Estado de derecho democrático y de una sociedad progresista y avanzada, tenemos que incorporar el movimiento juvenil y estudiantil. Para el futuro de la democracia chilena, la participación de la juventud resulta fundamental. Por eso, apoyamos a la juventud socialista en su esfuerzo por asumir los problemas, las demandas juveniles y por traducirlos en propuestas que sean

capaces de agrupar a los jóvenes y les devuelvan el entusiasmo, la irreverencia, la mística con que se constituyeron en actor decisivo de la lucha para sacar a Pinochet y recuperar la democracia.

Saludamos en especial la iniciativa de iniciar la campaña nacional: ¡JOVEN, NO TE HAGAS PASTA! con que la Juventud Socialista se abocará a movilizar las energías juveniles en rechazo al narcotráfico y la idiotización de la nueva generación de chilenos, dando cuenta de un problema cuya gravedad no es reconocida en toda su dimensión y con la valentía necesaria por la sociedad chilena.

La apatía e indiferencia confusa de parte de los jóvenes, es el resultado de la ausencia de una propuesta de vida que vuelva a pensar al individuo como un ser social y no exclusivamente, como un número en la cadena sin fin de la estadística. Ese es el gran desafío que enfrenta el humanismo socialista en los próximos años.

Con ese objetivo y para dinamizar y enriquecer la vida interna del Partido, saturada muchas veces de conflictos inconducentes, hemos constituido una Comisión de Programa en la idea de cumplir el acuerdo del Congreso de La Serena de realizar una Conferencia sobre Proyecto Socialista que elabore las ideas-fuerzas que expresen y vigoricen las aspiraciones esenciales del proyecto de sociedad que sugerimos al pueblo de Chile.

Tales ideas-fuerzas son consustanciales a la enorme responsabilidad de agrupar y motivar a nuestra sociedad en torno a la tarea de más justicia social en el país. Necesitamos vigorizar y hacer coherente el sistema de salud; extender y racionalizar el sistema educacional - incluido el acceso a la educación superior para todos los jóvenes - rehacer un sistema de seguridad social que, en especial, entregue protección y dignidad al adulto mayor; proseguir el esfuerzo en vivienda y resolver el problema de los allegados. Asimismo, es imperioso hacer más eficiente y humanizar la acción municipal y de los servicios públicos descentralizados que se relacionan a diario con millones de chilenos.

De modo muy especial, se requieren enormes esfuerzos y considerables inversiones para asegurar la viabilidad estratégica de Codelco, la principal empresa del país. Su permanencia en el sector público resulta

esencial, desde el punto de vista de los socialistas, para que no se cierre el cerrojo de los grandes grupos transnacionalizados sobre la economía nacional. Más allá de la discusión sobre la rentabilidad de la empresa, que es posible garantizar como lo enseña la experiencia habida desde la nacionalización del cobre hasta la fecha; se trata en primerísimo lugar de una concepción de país, de soberanía y de dignidad nacional que rechaza la eventualidad que Chile sea convertido en empresa o sociedad anónima adscrita a algún poderoso directorio multinacional. Modernizar sin privatizar, esa es nuestra inequívoca orientación respecto de Codelco.

Pero la tarea es más amplia, tenemos que enfrentar definitivamente la labor que siempre se posterga de modernizar las empresas del Estado, para que entreguen un buen servicio y no signifiquen un lastre o un desprestigio a las políticas públicas que son indispensables para atender a los chilenos más pobres.

Necesitamos también, dar un nuevo impulso al esfuerzo por la igualdad de la mujer, por el cese de los abusos y atropellos en su contra, por el fortalecimiento de la familia y los derechos de los niños. Digamos francamente, que en estas materias tenemos un severo déficit que es urgente comenzar a corregir.

Más aún, esta despreocupación permite que una demanda cultural propia del mundo laico actual, como es la de legislar sobre el divorcio, demanda que los socialistas compartimos, sea tomada y usada para presentarnos como enemigos de la familia, partidarios de la disolución moral e irresponsables frente a la infancia y su futuro. Debemos encarar esta situación, de modo que el aporte hecho por diputados socialistas al formular y presentar lo que hoy es la ley sobre violencia intrafamiliar, se debe ampliar y completar con nuevas iniciativas en un espacio tan masivo y tan decisivo par la vida de nuestra sociedad. En momentos en que la humanidad da saltos vertiginosos en el plano científico y tecnológico, resulta imperdonable que en muchos hogares la mujer, el hombre y los niños tengan una existencia insoportable por los maltratos, la violencia y el embrutecimiento. De allí que sea necesario desarrollar entre nosotros una reflexión más a fondo sobre las formas de robustecer la familia y asegurar los derechos de la infancia.

Se requiere también reponer la vigencia de la reforma judicial para lograr que el sistema sea capaz de atender a decena de miles de

ciudadanos de escasos recursos que no tienen acceso real a la justicia y que están desprotegidos frente al aumento de la delincuencia y de los abusos del poder del dinero.

Promover la justicia social en democracia, como es el propósito de los socialistas, significa asumir la responsabilidad de diseñar propuestas capaces de hacer realidad la Reforma del Estado. Una reforma para un papel más ágil, más dinámico, que rompa la lógica impuesta por el pensamiento neoliberal de hacer del Estado un trasto viejo y obsoleto impotente ante el reparto odiosamente injusto del producto nacional.

Se trata de reponer, no sólo nuestra convicción sino que también la legitimidad del rol del Estado como regulador de la economía y como promotor de políticas públicas que representen el interés común del conjunto de la sociedad nacional, y que se opongan al intercambio desigual de la riqueza provocado por la acción espontánea y ciega de las leyes de mercado. En el fondo, su papel como impulsor y orientador de un proyecto nacional que convoca al despliegue de todas las capacidades intelectuales, manuales, culturales, sociales y políticas, entorno a un concepto de país libertario e integrador, dotado de una estrategia de desarrollo social progresista, ecológicamente sustentable, que deje atrás el consumismo irracional, el utilitarismo exacerbado, las discriminaciones brutales, el lucro incontrolado; reemplazándoles por la solidaridad, la dignidad, la cooperación y el interés nacional.

Se trata de un Estado regionalizado y descentralizado, democrático, pluralista y participativo. Vivimos un período en que es indispensable afirmar sin complejos que el Estado, al tiempo, que disminuye o anula su acción en áreas que ya no son prioritarias o que perdieron su sentido estratégico, está en la necesidad de retomar la iniciativa en aspectos centrales para el futuro del país. Este es el caso de la Educación, la Salud y de la Seguridad Social cuya situación y gravitación en cualquier proyecto de futuro es determinante.

En esa dirección resulta de especial prioridad la concreción de una reforma educacional, que capacite al país para las demandas propias de la internacionalización de la economía, por una parte, y de avanzar hacia una sociedad más justa por otra.

El conocimiento se yergue cada día más como factor decisivo de la vida social y como herramienta básica del desarrollo personal. En el Gobierno del Presidente Aylwin se hizo un enorme esfuerzo en el cambio educacional y se evitó el colapso y la crisis del sistema. Por lo mismo, resulta alarmante que se arrastren insuficiencias crónicas del sistema educacional que dejó la dictadura. En concreto, la municipalización, con sus déficits asfixiantes e incoherencias en los diferentes niveles, que indican una incipiente anarquización en la educación del país, con severas consecuencias de desarraigo y desaliento juvenil, confirman que la reforma educacional constituye un desafío estratégico del desarrollo nacional. Nos pronunciamos por medidas que apunten a restituir lo mejor y esencial de la propuesta de Estado Docente en su sentido orientador, propulsor y de extensión de la Enseñanza, sin incurrir en una centralización administrativa del sistema que perdió la vigencia que tuvo en su momento.

Una sociedad democrática y avanzada no es posible sin que una palanca tan determinante de la democratización económica y social, como lo es el conocimiento científico y tecnológico de la sociedad moderna, quede reservado para un sector de los jóvenes, excluyendo del mismo a su amplia mayoría.

En resumen, el proyecto de desarrollo que postulamos, reclama una política pública, activa y eficaz, para dotar el país de un sistema educacional, de una estructura de salud pública y de un esquema previsional, capaces de contribuir con una mejor calidad de vida a la productividad necesaria para competir en el mercado mundial de asegurar la equidad y la justicia social que hagan posible la estabilidad y el avance del país a corto, mediano y largo plazo.

Tenemos que construir democracia a través de una labor de gobierno progresista, eficaz y libre de prácticas burocráticas y de síntomas de corrupción. Así también, es la hora de sacudirnos de la autocomplacencia con lo realizado hasta ahora, porque esa actitud no sólo no se justifica desde los valores y principios que nos animan; si no porque además irrita al mundo popular que percibe arrogancia y soberbia en una actitud triunfalista que cimienta la desafección ciudadana.

Tal vez lo más importante sea, precisamente, el desafío de recuperar todo el prestigio que la acción política requiere para hacer realidad su función en beneficio de la sociedad chilena.

No se nos escapa que desde los propios sectores democráticos se han asumido malas prácticas o lisa y llanamente, se han cometido gravísimos errores que perjudican a todos los chilenos.

Pero hemos de señalar también, que a caballo de los mismos la derecha política, intenta el sucio juego de hacer olvidar que la corrupción en el régimen militar llegó a ser una práctica habitual en el Estado, como ocurrió con el proceso de las privatizaciones que significaron el despojo de miles de millones de dólares por parte de un puñado de audaces en áreas estratégicas de la economía nacional. Así como intentan evadir que, gracias a la dictadura, los chilenos y, en especial, los trabajadores tuvieron que pagar la farrá y la codicia de la banca cuando la misma quebró a comienzos de la crisis del 82 - 83.

Tras esta mal intencionada amnesia, está el propósito de desprestigiar la acción política, de fomentar la apatía, la indiferencia en la conciencia cívica y de anular el interés y la participación de miles de chilenos en el proceso democrático. Es intentar, en el fondo, despojar al conjunto de la sociedad de su capacidad de resolver sobre sus propios asuntos, mediante el ejercicio de los métodos democráticos de gobierno para abrir la puerta a los diversos tipos de caudillismo-autoritario con que cuenta la derecha para tratar de recuperar la totalidad del poder.

En todo caso, lo peor es quedarse a la defensiva frente a esta perniciosa intencionalidad que erosiona y socava la renaciente democracia.

Por eso, los socialistas hemos elaborado un código de ética y una ley de probidad cívica y aspiramos a que en todo el país, el Partido se convierta en actor fundamental en la dignificación de la política, en la renovación de los métodos y procedimientos con que se ejecuta la acción pública y en la lucha por la eliminación radical de los malos hábitos y de las conductas reprochables, para responder adecuadamente a los actores sociales que esperan de sus representantes una acción de servicio público y no un espectáculo deplorable.

Pero no solo los brotes de corrupción o las interminables negociaciones de variado orden, influyen en el descrédito de la política. También contribuye a este fenómeno, el hecho que al exceso de pragmatismo y falta de transparencia, se suma la falta de identidad de los Partidos, que aparecen a los ojos de la opinión pública preocupados exclusivamente del poder por el poder, pues sus desvelos por los cargos no va acompañado del mismo interés con la promoción de valores, de principios y de comportamientos concretos y prácticos que singularicen y afiancen la personalidad específica de cada Partido.

Estamos convencidos que podemos alterar y romper este negativo círculo vicioso; revigorizando el humanismo socialista, a través de un intenso esfuerzo en la base social y mediante las formulaciones programáticas que nos den coherencia en el corto, mediano y largo plazo, que hagan claridad frente al cinismo, la hipocresía y el doble standard de los grupos más retrógrados de la derecha política.

Compañeros y compañeras:

El accionar de nuestra fuerza política está inseparablemente asociado con el gobierno de la Concertación, encabezado por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Lo que en su inicio fue la alianza para asegurar el triunfo del NO en año 88, se transformó en una coalición que se instaló en el escenario nacional con tal solidez, que ha pasado a constituirse en la columna vertebral del proceso democrático.

La Concertación puede hoy recibir muchas críticas, pero las recibe precisamente porque es el referente político obligado de cualquier opción, o demanda que tenga viabilidad en el país.

Los socialistas hemos captado profundamente el sentido y vigencia histórica de la Concertación y hemos reconstruido estos años la unidad socialista como unidad esencialmente concertacionista; es decir, que el proyecto socialista de este período no es otro que el proyecto de reconstrucción plena, efectiva y sólida de la democracia y de una sociedad progresista en Chile, que se realiza desde y a través de la Concertación. De modo que hemos sido, somos y seremos un Partido de la Concertación y

participaremos, en consecuencia, del Gobierno de la Nación, asumiendo integralmente nuestra responsabilidad de tal; bregando por nuestros puntos de vista con energía y con inalterable lealtad hacia la alianza de gobierno que dinamiza los cambios que vive el país.

El criterio de fondo que orienta las iniciativas políticas que hemos asumido como Partido, es evitar que el proceso democrático se paralice inútilmente o se inhíba hasta el punto del autobloqueo por miedo injustificado a una eventual desestabilización; no queremos que el temor a una situación de caos, que no se va a producir, conduzca a la pérdida de las energías y de la confianza democrática de millones de chilenos que respaldan a la Concertación.

Esto es en realidad el proyecto que postulamos para el P.S., un Partido que se vitaliza en la lucha por armonizar su proyecto histórico a las realidades inesquivables que condicionan la vida del país y, en consecuencia, de nuestro Partido.

Pero aspiramos a una acción política que no se resigne a los condicionamientos y se autolimita al punto del inmovilismo. La tarea es recoger la experiencia fecunda de Salvador Allende y de nuestros 61 años de existencia, plasmándola en un nuevo impulso de lucha por la emancipación del hombre y la ampliación progresiva de los niveles de libertad e igualdad individuales y colectivos.

Somos una fuerza política que ha entregado lo mejor de sí a la lucha de los trabajadores y de todo el pueblo de Chile y que se dinamiza en la pluralidad y la diversidad democrática que vive el país.

En esta sala se escuchó la voz y la opinión creadora de muchos socialistas de diferentes generaciones, que en su condición de legisladores hicieron un aporte sustantivo e insustituible a los trabajadores, al movimiento popular y a la democracia chilena. Muchos fueron cegados por el terrorismo de Estado. De todos, sin excepción, aprendemos día a día y nos fortalecemos en su ejemplo señero.

Asumamos sin complejos esa historia que nos dignifica y singulariza como un actor central de la vida política del presente siglo. Sin nostalgias estériles y con voluntad creadora.

Con vocación democrática y socialista, hagamos del nuevo gobierno de la Concertación, aquél que culmine la tarea histórica de reconstruir la democracia chilena.

Como nos enseñó Salvador Allende, **¡adelante compañeros!, ¡construyamos una nueva sociedad, en democracia, pluralismo y libertad!.**